



# Asamblea General

Distr. general  
3 de octubre de 2022  
Español  
Original: inglés

---

## Septuagésimo séptimo período de sesiones

Tema 68 b) del programa

**Promoción y protección de los derechos humanos:  
cuestiones de derechos humanos, incluidos otros medios  
de mejorar el goce efectivo de los derechos humanos y  
las libertades fundamentales**

## Situación de los derechos humanos en Myanmar

### Nota del Secretario General\*

El Secretario General tiene el honor de hacer llegar a la Asamblea General el informe presentado por el Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos en Myanmar, Thomas H. Andrews, en virtud de lo dispuesto en la resolución [49/23](#) del Consejo de Derechos Humanos.

---

\* Este informe se presentó después del plazo establecido para recoger la información más reciente.



## **Informe del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos en Myanmar, Thomas H. Andrews**

### *Resumen*

En julio de 2022, la junta militar de Myanmar ejecutó a cuatro presos políticos, entre ellos un destacado activista en pro de la democracia y un antiguo diputado. Estos actos intolerables siguen el patrón de la junta de hacer un uso implacable de la violencia contra el pueblo de Myanmar. En los últimos meses, las fuerzas militares han hecho bombardeos sistemáticos de aldeas y han masacrado a civiles inocentes, entre ellos 11 niños de la región de Sagaing que murieron por disparos cuando las fuerzas de la junta atacaron su escuela en septiembre. Los militares han matado a miles de personas y han provocado el desplazamiento de casi un millón desde el golpe. De los más de 12.000 presos políticos, muchos han sido torturados y un número desconocido ha muerto en la cárcel.

En este panorama tenebroso, la sociedad civil de Myanmar es una luz radiante y una fuente de inspiración. Hay activistas, defensores de los derechos humanos, trabajadores humanitarios, líderes comunitarios, periodistas, profesionales de la salud, educadores y otras personas que están asumiendo grandes riesgos para documentar las atrocidades, prestar asistencia humanitaria y atender las necesidades de las comunidades desplazadas y traumatizadas. Las organizaciones de derechos humanos, las asociaciones de mujeres, las redes profesionales, los sindicatos, los sindicalistas y las agrupaciones comunitarias están adoptando estrategias para actuar de forma segura y eficaz en un entorno letal. En muchos casos, las personas y las organizaciones operan con escaso apoyo internacional y pocas posibilidades de comunicarse con el mundo exterior.

En este informe, el Relator Especial presenta la desastrosa situación humanitaria y de derechos humanos de Myanmar y la asombrosa y esencial labor que en el país está realizando la sociedad civil en las circunstancias más adversas. El Relator pide a la comunidad internacional que considere a la sociedad civil de Myanmar como un aliado imprescindible para hacer frente a la crisis por la que pasa el país y que colabore con las redes ciudadanas para prestar asistencia y que dé más apoyo financiero y técnico a las organizaciones de la sociedad civil.

El destino de Myanmar depende de los activistas, las organizaciones y las redes que se han levantado para desafiar al régimen militar, defender los derechos humanos y preparar un futuro libre y democrático. Necesitan y merecen mucho mayor apoyo de la comunidad internacional.

## Índice

<i>Capítulo</i>	<i>Página</i>
I. Introducción .....	4
II. La sociedad civil de Myanmar: determinación y resiliencia .....	6
III. Documentar y afrontar ataques contra civiles .....	8
IV. Afrontar una crisis humanitaria cada vez mayor .....	11
V. Defender y apoyar a los presos políticos .....	13
VI. Resistir los ataques contra las libertades fundamentales y los derechos digitales .....	15
VII. Apoyar y defender a las mujeres .....	17
VIII. Defender los derechos de las personas con discapacidad .....	18
IX. Defender los derechos de los rohinyás .....	19
X. Información sobre la devastación del medio ambiente, el acaparamiento de tierras y las violaciones de derechos humanos por parte de las industrias extractivas .....	20
XI. Solicitudes de refuerzo de la respuesta anticrisis de la comunidad internacional planteadas por la sociedad civil de Myanmar .....	21
XII. Recomendaciones .....	23

## I. Introducción

1. El 25 de julio de 2022, la junta militar de Myanmar anunció que había ejecutado a cuatro presos políticos, entre ellos el activista de Generación del 88 Kyaw Min Yu, también conocido como Ko Jimmy, y el exdiputado de la Liga Nacional para la Democracia (LND) Phyo Zeya Thaw. El año y medio de atrocidades contra el pueblo de Myanmar transcurrido desde el golpe militar ilegal del 1 de febrero de 2021 ha estado marcado por este tipo de actos intolerables, que son una macabra advertencia de que la junta no cesa en sus ataques contra los líderes, organizaciones y redes que están teniendo el coraje de defender al pueblo de Myanmar.

2. Este informe ilustra lo peor y lo mejor de la humanidad, que puede observarse cada día en cualquier rincón de Myanmar, y ofrece a los Estados Miembros información actualizada sobre las atrocidades que la junta sigue infligiendo al pueblo de Myanmar, entre las que hay crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Pero también da cuenta de un aspecto de la situación de Myanmar que suele pasar desapercibido: el valor, la tenacidad y el éxito de las personas, organizaciones y redes que han dado un paso al frente para proteger y defender los derechos y las vidas de un pueblo asediado.

3. Al menos 84 presos políticos siguen en el corredor de la muerte y pueden ser ejecutados en cualquier momento. Más de 12.000 siguen detenidos arbitrariamente en condiciones deplorables. La junta ha intensificado los ataques contra la población civil utilizando aviones de combate, helicópteros y artillería pesada para bombardear pueblos y campamentos de desplazados internos. Se calcula que se han destruido 28.000 viviendas en una campaña cada vez más generalizada de incendios y ataques contra los sectores de la población civil que la junta considera partidarios de grupos de la oposición.

4. La crisis humanitaria es cada vez mayor y ha llegado a extremos catastróficos en muchas zonas de Myanmar. La junta niega alimentos, medicinas y servicios esenciales a millones de personas que necesitan desesperadamente ayuda humanitaria. Los esfuerzos de la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental (ASEAN) para atajar la crisis han resultado inadecuados. Una nueva estrategia de lucha contra esta crisis de los Estados Miembros podría literalmente salvar la vida de millones de personas.

5. En los grupos que históricamente han sufrido marginación, discriminación y violencia se ha sentido con más intensidad el atropello de los derechos por parte de la junta. Las mujeres y las niñas han cargado a menudo con las peores consecuencias del colapso económico de Myanmar y, en algunos casos, han sufrido actos de violencia sexual y de género cometidos por soldados y policías. Hay personas con discapacidad que han sido excluidas de las redes de apoyo y algunas fueron asesinadas o torturadas por soldados al no poder escapar de los ataques militares. No se han rendido cuentas por los ataques genocidas contra los rohinyá, a los que se sigue privando sistemáticamente de derechos básicos.

6. La junta ha intensificado los ataques contra quienes se interponen en su camino: organizaciones de la sociedad civil, activistas, periodistas y defensores de los derechos humanos que cada día lo arriesgan todo para proteger y servir a las gentes de Myanmar.

7. Si con sus ataques pretendía intimidar, debilitar o neutralizar a los defensores de los derechos humanos y a sus organizaciones, los dirigentes de la junta han cometido un grave error de cálculo. De hecho, ha ocurrido lo contrario. Varios grupos de la sociedad civil y redes de base muy motivados están documentando graves violaciones de los derechos humanos, proporcionando asistencia vital a las

poblaciones desplazadas y traumatizadas, organizando una resistencia no violenta a la junta y abogando por una intervención internacional más firme contra la crisis. Hay abogados que están arriesgando vidas y carreras para representar a los presos políticos, médicos que están montando clínicas móviles para subsanar las deficiencias causadas por el colapso del sistema público de salud y docentes que están organizando sistemas educativos sustitutivos.

8. Desde su anterior informe al Consejo de Derechos Humanos, el Relator Especial ha conversado con más de 100 representantes de la sociedad civil de Myanmar, que le han hablado de sus dificultades, de sus cambios de prioridades tras el golpe y de su voluntad de oponerse a la junta, luchar por los derechos humanos y servir a las poblaciones vulnerables. Una veterana defensora de los derechos humanos le dijo lo siguiente:

En este período de mi vida se está viendo el poder de una mayoría de personas que se unen y se sacrifican por un movimiento. Ha llegado el momento de acabar con la impunidad, buscar la justicia y expulsar a los militares de la política de Myanmar. Si no es ahora, ¿cuándo? Pase lo que pase, todos tenemos que actuar y contribuir desde donde estemos y durante el tiempo que haga falta. [...] Es nuestra responsabilidad. Tenemos que seguir manteniendo bien altas nuestras esperanzas: el día de la victoria llegará.

9. Este informe, que pone en valor la labor realizada por las entidades de la sociedad civil y las redes comunitarias para afrontar problemas esenciales de derechos humanos, se inspira sobre todo en las conversaciones del Relator Especial con activistas y defensores de los derechos humanos y en publicaciones de organizaciones locales de derechos humanos, grupos humanitarios y otras entidades.

10. Cuando se organizaban para proteger y defender su país de la escalada de ataques de la junta, muchos dirigentes y activistas de Myanmar se sintieron frustrados por la respuesta vacilante de la comunidad internacional, hicieron ver su indignación con los Estados Miembros que seguían proporcionando armas, formación y apoyo técnico a la junta y continuaban invirtiendo en proyectos cuyos recursos se ponían en manos de los militares y manifestaron su frustración con los Estados Miembros que habían apoyado a los ciudadanos asediados de Myanmar con palabras que no se habían plasmado en hechos concretos.

11. Algunos Estados Miembros adoptaron medidas efectivas, como imponer sanciones a la junta y sus garantes, pero al carecer de una estrategia clara no lograron articularlas en una acción de conjunto coordinada y eficaz. Los Estados Miembros, las organizaciones de ayuda y los donantes no han tenido en muchos casos la flexibilidad y la perspicacia necesarias para conseguir que la ayuda humanitaria llegase a las poblaciones desplazadas y vulnerables. Muchos dirigentes de la sociedad civil de Myanmar manifestaron su frustración al ver que la ASEAN permitía que la junta ignorase descaradamente el consenso de cinco puntos y fracasaba en su intento de hacer frente a esta crisis humanitaria en rápido deterioro.

12. El Relator Especial ruega a la comunidad internacional que tenga presente que la respuesta fallida a la crisis de Myanmar tiene un coste extremadamente alto, como muestra el deterioro de las condiciones que se describe en el presente informe, y pide a los Estados Miembros que actúen de forma coordinada para privar a la junta de los fondos, las armas y la legitimidad de los que se vale para seguir atentando contra los derechos y las aspiraciones democráticas del pueblo de Myanmar. Insta también a la ASEAN y a todos los Estados Miembros a que atiendan el llamamiento del Ministro de Relaciones Exteriores de Malasia, Saifuddin Abdullah, a “replantear” la respuesta a la crisis que la junta ha abierto en el país. Los Gobiernos, las entidades de las Naciones Unidas y los donantes internacionales tendrían que considerar a la sociedad

civil de Myanmar como un aliado imprescindible para hacer frente a la crisis por la que pasa el país y colaborar con las redes ciudadanas para prestar asistencia e incrementar el apoyo financiero y técnico que presta a las organizaciones de la sociedad civil.

13. Al final del informe, el Relator Especial hace recomendaciones concretas al Consejo de Seguridad, los Estados Miembros, la ASEAN, las entidades de las Naciones Unidas y los donantes internacionales, y subraya la necesidad de que la comunidad internacional apoye de manera más firme y sostenida a las valientes organizaciones de la sociedad civil y organizaciones no gubernamentales regionales que siguen trabajando sin descanso por el pueblo de Myanmar.

14. El Relator Especial está profundamente agradecido por la inmensa aportación que muchos activistas locales, periodistas y defensores de los derechos humanos han hecho a su labor, sin la cual no podría cumplir su mandato. Su coraje y tenacidad ante una brutalidad indescriptible siguen siendo para él fuente de admiración e inspiración.

## II. La sociedad civil de Myanmar: determinación y resiliencia

15. Los incesantes ataques y violaciones de los derechos humanos de la junta han causado grandes problemas a la sociedad civil, pero también han reforzado la determinación de activistas, periodistas y defensores de los derechos humanos. El golpe ha movilizado a miles de jóvenes del país, que están desempeñando un papel crucial en el movimiento en pro de la democracia. He aquí lo que una defensora de los derechos humanos dijo al Relator Especial:

En esta situación no hay esperanza, por lo que tenemos que crearla nosotros mismos. Seremos una fuente de esperanza mientras sigamos adelante. [...] Cada vez hay más personas que se levantan en defensa de los derechos humanos. No habíamos visto nada parecido en los 10 o 20 últimos años. Sentimos que vamos por buen camino. Esta es mi forma de seguir adelante.

16. Otros defensores de los derechos humanos y trabajadores humanitarios dijeron al Relator Especial que trabajar con comunidades que estaban sufriendo grandes calamidades los hacía más fuertes. Una investigadora en derechos humanos relató así su experiencia de trabajo en zonas de conflicto:

Estaba ahí cuando llegó el avión [militar] y tuvimos que refugiarnos en el búnker. [...] La gente me pregunta por qué fui. Es muy peligroso. La gente de esos lugares me inspiró valentía. Cuando no estoy [con ellos] no me siento segura porque pienso que mi gente tampoco lo está.

17. Un médico del Movimiento de Desobediencia Civil que atiende a poblaciones desplazadas dijo al Relator Especial lo siguiente:

Estoy vivo y todavía tengo manos. Hemos hecho muchas amputaciones. Mucha gente está sufriendo. Han perdido familias y hogares mientras nosotros seguimos vivos. Cuando caigo en el desencanto o la depresión, siento que tenemos que hacer algo por quienes sufren más que nosotros.

### Nuevas funciones y formas de trabajar

18. Para continuar con su importante labor, las organizaciones de la sociedad civil han adaptado sus estructuras, operaciones y protocolos de seguridad. El riesgo constante de arresto, detención y violencia ha hecho que muchas de ellas cerraran sus oficinas en las principales ciudades. Muchos activistas, periodistas y defensores de los derechos humanos se han ido de Myanmar y siguen trabajando desde países vecinos o países que les ofrecen visados, nueva residencia o asilo.

19. Numerosas organizaciones han asumido nuevas funciones para atender las necesidades de las comunidades que han sufrido violencia y vulneraciones de los derechos humanos a manos de los militares. Algunos grupos que habitualmente se dedican a documentar o defender los derechos humanos han destinado gran cantidad de recursos financieros y humanos a la prestación de asistencia humanitaria. Hay organizaciones de la sociedad civil que ofrecen apoyo psicosocial a comunidades traumatizadas, atienden las necesidades de los supervivientes de la violencia de género y prestan ayuda económica a las familias de presos políticos y militantes del Movimiento de Desobediencia Civil.

20. Muchas personas cuyas vidas se han visto trastornadas por el golpe de Estado deciden poner sus competencias y experiencias profesionales al servicio de los demás. Una representante de una conocida organización de derechos de la mujer refirió lo siguiente al Relator Especial:

En todos los ámbitos hay defensoras de los derechos humanos que, aun corriendo grandes riesgos, han seguido alzando la voz y actuando con valentía y perspicacia. Además de manifestarse, protestar y organizarse, esas mujeres ayudan a personas sobre el terreno proporcionándoles alimentos, agua, materiales de campaña, un nuevo alojamiento o dinero para sufragar gastos de transporte y comunicaciones. También hay mujeres que asumen importantes riesgos personales para poner sus competencias profesionales al servicio de los demás: profesionales de la medicina y voluntarias que prestan servicios médicos y administran tratamientos a personas heridas durante manifestaciones; mujeres periodistas que informan sobre las protestas y los problemas de justicia social dentro del país y en las fronteras; y abogadas que ofrecen servicios jurídicos gratuitos a detenidos y reclusos; etc. La comunidad internacional [...] debe reconocer la fuerza, el arrojo y la resiliencia de los activistas que luchan por la democracia, sobre todo las mujeres, y tomar medidas efectivas para apoyarlos.

### **Represión de la sociedad civil**

21. Los activistas, los defensores de los derechos humanos y las redes comunitarias iniciaron la extraordinaria labor que se presenta en este informe a raíz de la implacable ola de represión y ataques constantes que la junta emprendió contra la sociedad civil de Myanmar tras el golpe de Estado. Nada más dar el golpe, la junta empezó a acosar a líderes destacados de la sociedad civil, como la dirigente de Generación 88 Mya Aye y el popular cineasta Min Htin Ko Gyi, en un intento de eliminar preventivamente a la oposición. Esos activistas y más de 100 altos cargos de la Liga Nacional para la Democracia (LND) estuvieron en la primera tanda de presos políticos detenidos por la junta.

22. En 2021 y 2022, la junta detuvo sistemáticamente a cientos de activistas, periodistas y defensores de los derechos humanos. Muchas detenciones se produjeron durante la represión de protestas pacíficas, a menudo coordinadas por organizaciones de la sociedad civil o comités de huelga recién formados. También hubo funcionarios que emitieron órdenes de detención de activistas y líderes de protestas, y emisoras de televisión y periódicos controlados por los militares que difundieron públicamente listas y fotografías de personas “buscadas”.

23. La junta también ha actuado contra las organizaciones que informan sobre violaciones de los derechos humanos, organizan actividades en pro de la democracia o prestan asistencia humanitaria a poblaciones vulnerables. Las fuerzas de seguridad han allanado oficinas de medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil. Algunos oficiales de la junta declararon “ilegales” a numerosos grupos, con lo que sus simpatizantes y afiliados podían ser acusados de infringir la Ley de Asociaciones Ilícitas y encarcelados. La junta ha obligado a los bancos a acopiar

información sobre las actividades financieras de las organizaciones de la sociedad civil y a congelar las cuentas de determinados grupos. Se ha presentado una enmienda a la Ley de Registro de Organizaciones de 2014, uno de cuyos propósitos es hacer obligatorio el registro de las organizaciones, que podría endurecer aún más el control de los militares sobre la sociedad civil e imponer a los activistas nuevas responsabilidades penales por afiliarse a agrupaciones ciudadanas.

24. La junta ha intensificado las medidas de vigilancia de las organizaciones de la sociedad civil. Dos semanas después del golpe, la junta modificó la Ley de Administración de Distritos y Aldeas para restablecer una disposición que obligaba a registrar a los huéspedes que pernoctaban en domicilios privados, lo que dio a policías y militares la posibilidad de hacer registros nocturnos sin orden judicial, a menudo para localizar y detener a activistas. Los militares también han ofrecido recompensas económicas a quienes aportasen información sobre “organizaciones terroristas y usuarios de redes sociales que difunden noticias falsas”. En marzo de 2022, el cabecilla del golpe, Min Aung Hlaing, declaró que la junta “analizaba sistemáticamente” la actuación de las organizaciones de la sociedad civil.

### III. Documentar y afrontar ataques contra civiles

25. Algunas organizaciones locales de la sociedad civil y redes comunitarias, que están en el punto de mira de los ataques cada vez más intensos de los militares contra la población civil, documentan abusos y atienden las necesidades inmediatas de poblaciones desplazadas y traumatizadas. La retirada de diversos medios de comunicación internacionales y observadores de los derechos humanos ha hecho que los agentes internacionales tengan que depender aún más de la información recogida por defensores de los derechos humanos, periodistas y otras personas en el plano local. Un médico que presta servicios vitales de atención médica a comunidades afectadas por el conflicto dijo al Relator Especial que había empezado, por necesidad, a recopilar pruebas de crímenes de lesa humanidad cometidos por los militares, ya que de no hacerlo, esas pruebas desaparecerían.

26. Las redes de activistas y profesionales de la sociedad civil y las comunidades también han pasado a ejercer de equipos de respuesta inicial. Hay médicos y enfermeros que dejaron sus puestos en hospitales públicos y formaron en poco tiempo redes que prestan servicios médicos a poblaciones desplazadas y afectadas por el conflicto. El Relator Especial habló con un facultativo de un nuevo grupo médico que ha realizado más de 2.000 operaciones y ha prestado servicios ambulatorios a más de 33.000 personas. Otras organizaciones ayudan a las poblaciones locales a huir de la violencia, imparten formación para concienciar sobre las minas terrestres y ofrecen apoyo psicosocial a poblaciones traumatizadas.

27. Los agentes de la sociedad civil que hacen viajes con fines de investigación, prestación de servicios o asistencia se exponen a situaciones de alto riesgo en los puestos de control, como los registros corporales y las inspecciones de computadoras y dispositivos móviles. Las amenazas a las víctimas, los cortes de Internet y la destrucción de pruebas por los militares también dificultan la tarea de documentar violaciones de los derechos humanos.

28. La generalización de los ataques militares a la población civil en casi todas las zonas del país hizo que organizaciones y personas tuvieran que actuar con valentía<sup>1</sup>. Aunque hay patrones clásicos de violencia que se repiten en los estados de Kachín,

---

<sup>1</sup> Network for Human Rights Documentation-Burma, “Resisting a coup: human rights violations in Myanmar between January – June 2022”. Publicado en <https://nd-burma.org/wp-content/uploads/2022/07/NDB%20BAR%20Eng%20Final%2023.7.2022.pdf>.

Shan y Kayín, han surgido nuevos focos en las regiones de Sagaing y Magway, los estados de Chin y Kayah y otros lugares<sup>2</sup>. En esas zonas, los militares y las milicias afines a la junta han infligido a la población civil ataques con medios aéreos, artillería pesada o armamento ligero, ejecuciones, minas terrestres e incendios intencionales.

29. Un joven activista que trabaja en la región de Sagaing refirió lo siguiente al Relator Especial:

En las poblaciones y las zonas rurales persisten el conflicto y los combates. Hay muchos desplazados internos, algo normal en las aldeas. Cuando empezó el conflicto [...] los militares [...] atacaban y se iban. Ahora atacan primero y después prenden fuego a toda la aldea. Están haciendo mayor uso de la fuerza aérea; a veces atacan aldeas con aviones a reacción, que causan más bajas. Cuando atacan alguna aldea, hay ancianos que no están en condiciones de huir y bebés, a veces mujeres, que se dejan abandonados. Con frecuencia, las personas mayores son quemadas vivas. Tenemos constancia de un caso de quema de bebés.

30. Como se desprende claramente de las pruebas, los ataques militares contra la población civil no solo atentan contra el derecho internacional humanitario y de los derechos humanos, sino que también pueden constituir crímenes de guerra y de lesa humanidad. Las bajas civiles son consecuencia directa de las políticas militares que permiten los ataques a civiles. Presumiblemente, los oficiales militares que integran la cadena de mando hasta el Comandante en Jefe Min Aung Hlaing son responsables de estos crímenes, bien por participar directamente en su comisión, bien por estar al mando de quienes lo hicieron, y deben responder por ello.

## Muertos

31. Según Assistance Association for Political Prisoners, más de 2.200 civiles han perdido la vida durante la represión militar del movimiento en pro de la democracia<sup>3</sup>. Es probable que esta cifra no tenga en cuenta las bajas civiles de determinadas categorías, como las causadas por fuerzas de oposición o grupos paramilitares afines a la junta, y tampoco recoja la totalidad de las muertes de civiles por combates en zonas pobladas por minorías étnicas<sup>4</sup>.

32. Los militares han matado a cientos de civiles en bombardeos con artillería pesada y ataques aéreos con helicópteros y aviones de combate<sup>5</sup> y han bombardeado con frecuencia campamentos de desplazados internos o escondrijos temporales de personas que habían huido de ataques anteriores<sup>6</sup>. Los soldados también han abierto

<sup>2</sup> Karen Peace Support Network, “SAC regime unleashes war across the southern Dawna Range”, julio de 2022. Publicado en [https://www.karenpeace.org/wp-content/uploads/2022/07/Briefing\\_SAC-regime-unleashes-war-across-the-southern-Dawna-Range\\_-Eng.pdf](https://www.karenpeace.org/wp-content/uploads/2022/07/Briefing_SAC-regime-unleashes-war-across-the-southern-Dawna-Range_-Eng.pdf).

<sup>3</sup> Assistance Association for Political Prisoners, “Daily briefing in relation to the military coup”, 13 de septiembre de 2022. Publicado en <https://aappb.org/?p=22970>.

<sup>4</sup> Véase, por ejemplo: Institute for Strategy and Policy-Myanmar, *Data Matters*, “Over 5,600 civilians killed”, 10 de mayo de 2022. Publicado en <https://www.ispmyanmar.com/isp-data-matters/#images-37>.

<sup>5</sup> Véase Karenni Civil Society Network, “Bi-weekly situation update, July 18 – July 31 2022”, 3 de agosto de 2022. Publicado en <https://karennicsn.org/2022/08/03/july-18-july-31-2022-summary-of-sac-human-rights-violations-in-karenni-state-and-pekhon-township>; Karen Human Rights Group, “Statement in condemnation of escalation of violence in Southeast Burma”, 19 de julio de 2022. Publicado en [https://khr.org/2022/07/statement-condemnation-escalation-violence-southeast-burma?mc\\_cid=4408408a4e](https://khr.org/2022/07/statement-condemnation-escalation-violence-southeast-burma?mc_cid=4408408a4e).

<sup>6</sup> Karen Human Rights Group, “Mu Traw District situation update: air strikes, indiscriminate shelling, displacement, landmine explosions, retaliation against civilians and arbitrary taxation, December 2021 to February 2022”, 1 de julio de 2022. Publicado en

fuego contra civiles desarmados, una táctica que, según diversas organizaciones locales de derechos humanos, es la continuación de la antigua política militar de “disparar en el acto” al atacar zonas controladas por los grupos armados de la oposición<sup>7</sup>. El 16 de septiembre de 2022, varios helicópteros artillados realizaron disparos contra una escuela de la región de Sagaing antes de que los soldados entraran en la aldea y abrieran fuego. Según se ha informado, en ese ataque, que fue ampliamente condenado por grupos de la sociedad civil de Myanmar y funcionarios de las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales, murieron 11 niños.

33. Hay múltiples casos de militares que ejecutaron a personas desarmadas que estaban bajo su custodia, incluidas varias matanzas documentadas por medios de comunicación y organizaciones de derechos humanos locales<sup>8</sup>. En muchos de ellos, los cadáveres de las víctimas fueron quemados. En los últimos meses se han confirmado varias masacres de las que se tenía noticia gracias a testimonios de tráfugas y desertores del ejército y a fotografías y vídeos tomados por soldados.

34. El ejército hizo un uso profuso de las minas terrestres en zonas civiles, a menudo colocándolas en lugares escogidos deliberadamente con la intención de causar bajas civiles<sup>9</sup>. Hay investigadores en derechos humanos que han encontrado o documentado explosiones de minas terrestres en campos de cultivo, caminos utilizados por los lugareños, el exterior de iglesias e instalaciones de aseo y en domicilios de civiles<sup>10</sup>. Según cifras facilitadas por las Naciones Unidas, durante el primer semestre de 2022, las minas terrestres causaron la muerte de al menos 41 civiles y dejaron heridos a 144<sup>11</sup>. La proporción de mujeres víctimas de minas terrestres y municiones sin detonar ha aumentado desde el golpe de Estado. Un defensor de los derechos humanos refirió lo siguiente al Relator Especial:

En cuanto llegan a una aldea o pueblo, los militares colocan minas en diversos lugares: las carreteras, los accesos a las localidades, las puertas de las casas y alrededor de las localidades. En una ocasión fuimos a una aldea [y] vimos 16 minas terrestres. [...] Si pisas una, acabarás con las piernas o los brazos mutilados. Cada vez hay más personas con discapacidades causadas por las minas terrestres, que también dejan muchas muertes.

35. Las milicias y grupos paramilitares afines a la junta, como los grupos Pyusawhti y Thway Thauk, también han atacado y asesinado civiles en muchas zonas del país. La organización Human Rights Foundation of Monland ha documentado varios

---

<https://khrgh.org/2022/07/22-77-s1/mu-traw-district-situation-update-air-strikes-indiscriminate-shelling-displacement>.

<sup>7</sup> Chin Human Rights Organization, “Collective punishment: implementation of ‘Four Cuts’ in Mindat Township”, marzo de 2022; Karenni Human Rights Group, “Quarterly Briefer”, 13 de julio de 2022. Publicado en

[https://actionnetwork.org/user\\_files/user\\_files/000/078/511/original/KnHRG\\_-\\_Quarterly\\_Briefer\\_Issue\\_2.pdf](https://actionnetwork.org/user_files/user_files/000/078/511/original/KnHRG_-_Quarterly_Briefer_Issue_2.pdf), pág. 3.

<sup>8</sup> Shan Human Rights Foundation, “Extrajudicial killing, torture, arbitrary arrest, looting, torching of houses by SAC troops in Ywangan, southern Shan State, February–April 2022”, 11 de mayo de 2022. Publicado en <https://shanhumanrights.org/extrajudicial-killing-torture-arbitrary-arrest-looting-torching-of-houses-by-sac-troops-in-ywangan-southern-shan-state/>.

<sup>9</sup> Human Rights Foundation of Monland, “Human rights situation in Mon State, Karen State and Tanintharyi Region”, julio de 2022. Publicado en <https://rehmonnya.org/archives/7457>.

<sup>10</sup> Amnistía Internacional, “Myanmar: Military’s use of banned landmines in Kayah State amounts to war crimes”, 20 de julio de 2022.

<sup>11</sup> Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, “Myanmar landmine / ERW incidents information”, enero-junio de 2022. Publicado en [unicef.org/myanmar/reports/myanmar-landmineerw-incidents-information-16](https://www.unicef.org/myanmar/reports/myanmar-landmineerw-incidents-information-16).

ataques de milicias que dejaron 129 víctimas, 18 de ellas mortales<sup>12</sup>. Esos grupos, con frecuencia armados y adiestrados por el ejército, cometen crímenes con total impunidad. Las Fuerzas de Defensa del Pueblo y otros grupos contrarios a la junta han llevado a cabo asesinatos selectivos de oficiales de la junta y presuntos confidentes.

### **Destrucción de viviendas de civiles y desplazamientos**

36. Según se ha informado, más de 28.000 viviendas y otras estructuras de civiles fueron destruidas por bombardeos, incendios intencionales y otros medios utilizados en el conflicto armado tras el golpe de Estado<sup>13</sup>. Las regiones de Sagaing y Magway han sido las más afectadas, ya que los militares arrasaron sistemáticamente las aldeas supuestamente afines a grupos armados opositores. Ahora bien, los militares destruyeron bienes de civiles en zonas de conflicto de todo el país, como han documentado varias organizaciones locales de derechos humanos<sup>14</sup>.

37. Los ataques contra la población civil y la destrucción de sus bienes responden al objetivo militar de desplazar a las poblaciones civiles que podrían servir de base de apoyo a grupos armados opositores. Según las Naciones Unidas, del total de 1,3 millones de desplazados que hay en Myanmar, casi un millón se vio forzado a desplazarse a raíz del golpe de Estado<sup>15</sup>. Las cifras de desplazados estimadas para las zonas en las que operan por las organizaciones locales de derechos humanos y asistencia humanitaria, que trabajan a menudo en estrecho contacto con esas poblaciones, suelen ser más altas que las cifras comparables presentadas las Naciones Unidas.

38. Un hombre que colabora con una organización local de la sociedad civil para prestar asistencia humanitaria en el sur del estado de Shan refirió lo siguiente al Relator Especial:

Ha pasado año y medio [desde el golpe] y solo queda una zona de guerra. Los desplazados no se concentran en un lugar, tienen que huir varias veces. Después de desplazarse vuelven a ser atacados. Esta es una zona principalmente agrícola que, desde el golpe y la intensificación del conflicto, los agricultores ya no pueden cultivar.

## **IV. Afrontar una crisis humanitaria cada vez mayor**

39. La sociedad civil de Myanmar ha mostrado gran valentía, resiliencia y capacidad de adaptación al prestar asistencia humanitaria. Muchas organizaciones han utilizado recursos destinados a sus ámbitos habituales de actuación para ofrecer una ayuda vital a las poblaciones desplazadas y afectadas por el conflicto. Esas organizaciones

<sup>12</sup> Human Rights Foundation of Monland, “The rise of pro-junta militias in Southeastern Burma”, agosto de 2022. Publicado en <https://rehmonnya.org/reports/RiseofMilitiasSEBurmaHURFOM.pdf>.

<sup>13</sup> Institute for Strategy and Policy-Myanmar, “Over 28,000 homes and buildings torched or destroyed since coup”, 27 de julio de 2022. Publicado en <https://www.ispmyanmar.com/over-28000-homes-and-buildings-torched-or-destroyed-since-coup/>. Véase también: Myanmar Witness, “Burning Myanmar: the growing use of arson against civilian communities”, 22 de julio de 2022, publicado en [https://www.myanmarwitness.org/\\_files/ugd/06ca64\\_95f4dcfcb948409f89db720ab2176929.pdf](https://www.myanmarwitness.org/_files/ugd/06ca64_95f4dcfcb948409f89db720ab2176929.pdf).

<sup>14</sup> Southern Monitor, “Tanintharyi Region monthly situation update”, 31 de julio de 2022. Publicado en <https://reliefweb.int/report/myanmar/myanmar-tanintharyi-region-monthly-situation-update-31-july-2022>.

<sup>15</sup> Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas, “Myanmar emergency update No. 21”, 2 de septiembre de 2022.

disponen de los conocimientos y las redes locales necesarios para superar las barreras que pone la junta con el propósito de entorpecer la prestación de asistencia. También se han mostrado dispuestas a asumir riesgos importantes para llegar a las comunidades vulnerables. Dado que estas organizaciones están atendiendo necesidades esenciales de protección y asistencia, la comunidad internacional debería dar el paso de financiar de manera más sistemática y sostenible este tipo de iniciativas<sup>16</sup>.

40. Muchos grupos siguen dependiendo de donaciones de las comunidades locales y otras fuentes de ingresos preexistentes. Un representante de una organización que presta asistencia humanitaria a los desplazados internos refirió lo siguiente al Relator Especial:

Es difícil que las organizaciones no gubernamentales internacionales o las Naciones Unidas lleguen hasta nosotros: hay muchos riesgos. En las comunidades locales estamos asumiendo todos los riesgos y afrontando la crisis sobre el terreno. Pero los fondos que recibimos son muy escasos. Querría hacer llegar el mensaje de que las organizaciones locales de la sociedad civil tienen capacidad de recibir y manejar fondos de forma responsable. Somos nosotros los que estamos asumiendo todos los riesgos sobre el terreno y los que podemos llegar a los lugares difíciles.

41. Para hacer que la sociedad civil se interesara en mayor medida por la distribución de ayuda y la asistencia de emergencia ha sido necesaria una crisis humanitaria devastadora que afectará profundamente a las poblaciones de todo el país. La campaña deliberada de desplazamientos forzados emprendida por los militares ha privado a vastos sectores de la población de alimentos, refugio y medios de subsistencia. El desplome de las instituciones gubernamentales y los servicios públicos ha dejado a millones de personas sin acceso a la atención médica, las iniciativas de salud pública y los programas de alivio de la pobreza.

42. Según un estudio reciente, los ingresos de las familias de Myanmar se han reducido prácticamente a la mitad desde el golpe de Estado<sup>17</sup>. Se estima que en 2022 hay 13,2 millones de personas con inseguridad alimentaria moderada o grave y las Naciones Unidas han alertado de que la subida de los precios de los alimentos y la inestabilidad podrían agravar la crisis alimentaria en los próximos meses<sup>18</sup>. En un documento de sesión publicado en junio de 2022, el Relator Especial hizo hincapié en las necesidades humanitarias de los niños, que corren riesgos de malnutrición y tienen un acceso limitado a la atención médica y la vacunación sistemática, entre otros problemas.

43. En mayo de 2022, la ASEAN concertó un acuerdo general para prestar asistencia humanitaria a Myanmar basado en la colaboración de su Centro de Coordinación de la Asistencia Humanitaria destinada a la Gestión de Desastres con un equipo de tareas para Myanmar bajo el control exclusivo de la junta. El acuerdo dispone que toda distribución de ayuda ha de ser aprobada por el equipo de tareas para Myanmar y debe destinarse a zonas acordadas de consumo por el Centro y el equipo de tareas. Su antiguo Director Ejecutivo dijo al Relator Especial que el Centro no estaba concebido para afrontar crisis humanitarias surgidas de conflictos armados. La sociedad civil de Myanmar advirtió de que ese acuerdo, en cuya negociación no habían participado el

<sup>16</sup> Véase Karen Human Rights Group, “Denied and deprived: local communities confronting the humanitarian crisis and protection challenges in Southeast Burma”, junio de 2022, [https://khr.org/sites/khr.org/files/report-docs/denied\\_and\\_deprived\\_-\\_english\\_full\\_report.pdf](https://khr.org/sites/khr.org/files/report-docs/denied_and_deprived_-_english_full_report.pdf).

<sup>17</sup> Save the Children, “Families in Myanmar lose more than half their income in year of conflict, Says Save the Children”, 28 de julio de 2022.

<sup>18</sup> Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas, “Myanmar humanitarian update No. 20”, 31 de julio de 2022.

Gobierno de Unidad Nacional, las organizaciones armadas de minorías étnicas ni la sociedad civil, permitiría a los militares controlar e instrumentalizar la prestación de asistencia humanitaria<sup>19</sup> o un resultado aún peor: imposibilitar las entregas de ayuda transfronteriza.

44. En sus conversaciones con el Relator Especial, varios activistas y defensores de los derechos humanos criticaron reiteradamente el acuerdo de ayuda humanitaria de la ASEAN, señalando que la ayuda no llegaría a las poblaciones necesitadas si la junta se encargaba de distribuirla. La junta era responsable de la crisis, de las trabas que entorpecían la prestación de asistencia y de los ataques a trabajadores humanitarios. Aunque la ASEAN apoyara en teoría la distribución de ayuda a todas las poblaciones necesitadas, era inconcebible que la junta distribuyera ayudas a unas poblaciones a las que estaba atacando y desplazando deliberadamente.

45. Varias entidades de las Naciones Unidas y organizaciones internacionales de ayuda que trabajan en Myanmar ven entorpecida su labor por los retrasos burocráticos, los requisitos de autorización de viajes y las denegaciones expresas de acceso a numerosas regiones, incluidas las más necesitadas, que les impone la junta. Los trabajadores humanitarios (aquellos que trabajan con organismos internacionales y entidades de la sociedad civil) se exponen a riesgos importantes: registros de sus vehículos en puestos de control, inspecciones de dispositivos móviles y computadoras, extorsiones, detenciones, privación de libertad, tortura, ejecución y ataques militares indiscriminados. Los militares bloquean o confiscan las ayudas con frecuencia. En un estudio mundial reciente sobre los problemas que dificultan la distribución de ayuda humanitaria se indica que Myanmar es uno de los cuatro países con “restricciones extremas” del acceso humanitario<sup>20</sup>.

46. Muchos desplazados están en zonas pobladas por minorías étnicas próximas a las fronteras exteriores de Myanmar. Dada la intransigencia de la junta en lo tocante a la distribución de ayuda, la asistencia humanitaria transfronteriza puede resultar muy útil para atender las necesidades de muchas poblaciones desplazadas. Ahora bien, la comunidad internacional no ha puesto suficiente empeño en facilitar una asistencia transfronteriza proporcional a la gravedad de la crisis. Muchas organizaciones humanitarias siguen distribuyendo ayuda solo en Myanmar y por cauces oficiales internos. Hay países vecinos que no suelen autorizar la distribución de ayuda a través de las fronteras y restringen las actividades de las organizaciones de la sociedad civil que distribuyen ayuda por cauces no oficiales<sup>21</sup>.

## V. Defender y apoyar a los presos políticos

47. Ante la campaña de detención masiva de la junta, hay abogados que siguen representando a presos políticos a pesar de la violación sistemática de las debidas garantías procesales. Un abogado que representa a presos políticos dijo lo siguiente al Relator Especial:

<sup>19</sup> Véase “ASEAN: decision on humanitarian assistance on Myanmar must include all related parties to avoid aid weaponization by the junta”, 11 de mayo de 2022. Publicado en [https://progressivevoicemyanmar.org/wp-content/uploads/2022/05/Update\\_ASEAN\\_Humanitarian\\_Joint\\_Statement\\_FINAL.pdf](https://progressivevoicemyanmar.org/wp-content/uploads/2022/05/Update_ASEAN_Humanitarian_Joint_Statement_FINAL.pdf).

<sup>20</sup> ACAPS, “Humanitarian access overview”, julio de 2022. Publicado en [https://www.acaps.org/sites/acaps/files/products/files/acaps\\_humanitarian\\_access\\_overview\\_jul\\_y\\_2022\\_0.pdf](https://www.acaps.org/sites/acaps/files/products/files/acaps_humanitarian_access_overview_jul_y_2022_0.pdf). Eritrea, Ucrania y el Yemen son los otros tres países que, según el estudio, aplican restricciones extremas.

<sup>21</sup> Daniel P. Sullivan, Refugees International, “Paths of assistance: opportunities for aid and protection along the Thailand-Myanmar border”, julio de 2022.

Constatamos que los jueces no juzgan conforme a derecho. No hay justicia. Los jueces favorecen al Consejo de Administración del Estado. Puede caer una pena de hasta tres años solo por publicar algo en Facebook o Livestream. [...] Tras el golpe, [los jueces aplicando] las penas máximas.

48. Incluso los abogados que defienden a los presos políticos son detenidos, amenazados y acosados por los militares. Desde que se produjo el golpe hasta la fecha, al menos 42 abogados han sido detenidos<sup>22</sup>. En la mayoría de los casos, se desconoce el fundamento jurídico de las detenciones.

49. Los abogados se han visto obligados a desempeñar nuevas funciones tras el golpe, lo que pone de manifiesto el desmoronamiento del Estado de derecho en Myanmar. Es habitual que las personas que son detenidas permanezcan largos períodos en paradero desconocido, lo que apunta a que probablemente la junta sea responsable de desapariciones forzadas, un crimen de lesa humanidad. En la actualidad, los abogados suelen actuar como intermediarios: ayudan a las familias a localizar a sus parientes detenidos y a comunicarse con ellos y entablan negociaciones para conseguir su liberación. Muchas organizaciones de la sociedad civil ayudan a los familiares de los presos políticos proporcionándoles apoyo financiero y psicosocial, entre otras cosas.

50. Los abogados están siendo blanco de ataques, pero su volumen de trabajo no deja de aumentar. Assistance Association for Political Prisoners ha informado de que, al 13 de septiembre de 2022, después de las ejecuciones del mes de julio, 84 presos políticos seguían en el corredor de la muerte y otros 42 habían sido condenados en rebeldía a la pena capital. Según esa misma asociación, 15.506 personas habían sido detenidas desde el golpe por actividades de promoción de la democracia o de oposición a la junta. De ese total, 12.372 permanecen detenidas. Sobre muchos de los detenidos en los últimos meses pesan cargos penales por actividades de índole privada, como hacer publicaciones en redes sociales o donar dinero a grupos de la oposición. Se ha informado de que al menos 15 docentes asociados al programa de educación Kaung for You, que patrocina el Gobierno de Unidad Nacional, fueron detenidos después de que funcionarios militares accedieran a la base de datos de una escuela.

51. Un activista juvenil explicó al Relator Especial los estragos que las detenciones están causando en el movimiento en pro de la democracia:

La seguridad de quienes participan en el movimiento es un reto. Intentas confiar en ti mismo, pero no sabes cuándo te van a detener. Hay jóvenes que me han dicho: “Sí, tenemos mucho cuidado, pero no sabemos dónde ir para estar seguros”. Los jóvenes de las ciudades no tienen lugares seguros a los que ir.

52. La junta ha utilizado diversas estrategias para castigar y presionar a las personalidades de la oposición y otras personas que escapan al extranjero o consiguen sortear las detenciones. Según Assistance Association for Political Prisoners, al 13 de septiembre de 2022, la junta mantenía como rehenes a 394 personas, incluidos 55 niños, por el mero hecho de tener alguna relación con personas buscadas. La junta también ha confiscado más de 760 viviendas y edificios vinculados a miembros de la LND y figuras de la oposición y ha bloqueado el acceso a ellos.

53. La junta ha detenido a centenares de miembros de la LND y sigue promoviendo causas irregulares contra sus dirigentes. En junio de 2022, la ex Consejera de Estado Aung San Suu Kyi fue trasladada del lugar secreto en el que había sido encerrada con varios miembros de su equipo, a la prisión de Naipyidó, donde permanece recluida en

---

<sup>22</sup> Véase el total de detenciones en la base de datos de Assistance Association for Political Prisoners (consultada el 13 de septiembre de 2022).

régimen de aislamiento. Se le han imputado cargos por corrupción, fraude electoral, revelación de secretos de Estado, instigación, importación irregular y violación de las restricciones impuestas a raíz de la enfermedad por coronavirus (COVID-19) en al menos 18 causas. Ya ha sido condenada en seis causas a un total de 20 años de prisión.

54. Las condiciones penitenciarias siguen siendo espantosas; torturar a los presos políticos y otros detenidos es una práctica generalizada y sistemática de las fuerzas de la junta (véase [A/HRC/49/72](#)). Al parecer, los presos políticos sufrían represalias por protestar contra la ejecución de las cuatro personalidades de la oposición y quejarse de sus condiciones de reclusión. Según se ha informado, las fuerzas de la junta han ejecutado a más de 100 personas en comisarias, prisiones y centros de interrogatorio y cientos más han muerto en lugares de reclusión no oficiales bajo custodia militar o policial<sup>23</sup>.

55. La detención masiva de manifestantes pacíficos, defensores de los derechos humanos, dirigentes de la LND y otras personas es un aspecto clave del ataque generalizado y sistemático de la junta contra la población civil de Myanmar probablemente constitutivo del crimen de lesa humanidad de encarcelación u otra privación grave de la libertad física. Algo similar ocurre con el trato que las fuerzas de la junta dan a los presos políticos, probablemente constitutivo del crimen de lesa humanidad de tortura y otros actos inhumanos, y con la ejecución de presos políticos, probable crimen de lesa humanidad de asesinato.

## VI. Resistir los ataques contra las libertades fundamentales y los derechos digitales

56. Aunque la junta trabaja sin descanso para destruir el espacio cívico, las entidades de la sociedad civil de Myanmar siguen promoviendo movilizaciones en pro de la democracia y ayudando a las personas a ejercer sus libertades fundamentales. A riesgo de ser agredidos, detenidos o torturados, los activistas han seguido con sus protestas pacíficas, a menudo en forma de movilizaciones relámpago (*flash mobs*), huelgas silenciosas y boicots. En los últimos meses, varios comités de huelga y organizaciones de la sociedad civil han organizado distintas protestas en todo el país para conmemorar el Año Nuevo birmano y los 18 meses transcurridos desde el golpe de Estado, celebrar las festividades del Día de los Mártires y recordar la ejecución de cuatro presos políticos en julio. Se ha informado de que los presos políticos también organizaron protestas y huelgas de hambre en las cárceles.

57. Las entidades de la sociedad civil también han trabajado con empeño para que las personas pudieran seguir ejerciendo con seguridad sus libertades fundamentales en Internet. Muchos grupos han impartido formación sobre seguridad digital y han facilitado el paso a plataformas de mensajería seguras. Otros han distribuido tarjetas SIM utilizables en todo el mundo o licencias de redes privadas virtuales. Algunos activistas han creado redes de malla que funcionan con antenas Bluetooth o WiFi y permiten comunicarse cuando se interrumpen los servicios de Internet.

58. La sociedad civil de Myanmar ha recurrido a esas medidas para combatir la ofensiva de la junta contra las libertades fundamentales, particularmente las libertades de expresión, reunión pacífica y asociación. Miles de personas han sido detenidas y procesadas por expresar sus opiniones en la calle y por Internet. Según Assistance Association for Political Prisoners, desde el golpe de Estado se ha detenido a más de 160 periodistas, editores, cineastas y otros profesionales de los medios de comunicación, y más 82 siguen detenidos. Muchos han sido acusados en virtud del

<sup>23</sup> Institute for Strategy and Policy-Myanmar, *Data Matters*, “At least 445 died after SAC arrests”, 10 de mayo de 2022. Publicado en <https://www.ispmyanmar.com/isp-data-matters/#images-35>.

artículo 505A del Código Penal, una disposición añadida por la junta tras el golpe que prevé hasta tres años de prisión por difundir “noticias falsas”.

59. La junta también ha tratado de coartar drásticamente las libertades en espacios virtuales restringiendo la conexión a Internet en muchas zonas del país. Según se ha informado, al menos 31 municipios de siete estados y regiones han sufrido cortes de Internet en el último año y otros 23, bajones de la velocidad de conexión<sup>24</sup>. Las restricciones de Internet suelen coincidir con ofensivas militares y escaladas de ataques a civiles, lo que hace sospechar que los militares pueden estar intentando utilizar los cortes de Internet para encubrir sus crímenes<sup>25</sup>.

60. La salida del mercado de Myanmar de empresas extranjeras de telecomunicaciones ha incrementado el riesgo de vigilancia y vulneración del derecho a la intimidad y ha hecho más difícil documentar las interrupciones de los servicios de Internet. Al venderse en marzo de 2022 la empresa que el operador noruego Telenor tenía en Myanmar, los datos de sus usuarios se transfirieron a una empresa vinculada a los militares. Telenor había desvelado con anterioridad que le habían llegado órdenes oficiales de entregar esos datos e instalar tecnología de vigilancia. En septiembre de 2022, Ooredoo Group anunció la venta de Ooredoo Myanmar a Nine Communications, una empresa de Singapur que tiene entre sus propietarios a un empresario de Myanmar presuntamente vinculado al ejército. Esa venta ha hecho temer que todo el sector de las telecomunicaciones pueda acabar bajo el control de los militares.

61. Se ha informado de que la junta ha comprado cámaras chinas de circuito cerrado de televisión con capacidad de reconocimiento facial y las ha instalado por las principales ciudades, lo que hace temer que esa tecnología se utilice para perseguir a activistas y vigilar y reprimir protestas. La junta ha avanzado en sus planes de implantar un sistema de identificación electrónica que permitiría acceder a los datos biométricos de todas las personas mayores de 10 años. Al parecer, la junta exigirá a los usuarios de teléfonos móviles que registren los números de identificación internacional de equipos móviles (IMEI) (un identificador único que asigna el fabricante) de todos sus dispositivos<sup>26</sup>.

62. Al tiempo que restringían el acceso a Internet, la junta y grupos afines utilizaron plataformas en línea para amenazar a opositores y generar desinformación. Varios activistas y defensores de los derechos humanos describieron al Relator Especial la manera en que habían sido amenazados y acosados en redes sociales. Muchos de ellos también han sufrido *doxing*, es decir, la publicación de información privada, como la dirección del domicilio privado. Las mujeres activistas son a menudo objeto de amenazas y actos de acoso de carácter sexual y tintes misóginos de grupos que apoyan a los militares. Según los informes confidenciales que varias entidades de la sociedad civil e investigadores internacionales facilitaron al Relator Especial, muchas de esas cuentas podían estar controladas o patrocinadas por personal militar. La plataforma Telegram se está convirtiendo en el principal canal de difusión de contenidos favorables a los militares, probablemente porque la empresa dedica menos recursos a moderarlos.

<sup>24</sup> Athan-Freedom of Expression Activist Organization, “Internet access amid darkness and lives amid threats”, mayo de 2022.

<sup>25</sup> Véase “Open call to all international actors: Do more to stop Internet shutdowns shrouding torchings and killings in Myanmar”, 23 de junio de 2022. Publicado en <https://civicus.org/index.php/media-resources/news/5870-open-call-to-all-international-actors-do-more-to-stop-internet-shutdowns-shrouding-torchings-and-killings-in-myanmar>.

<sup>26</sup> Access Now, “Myanmar IMEI FAQ: how the junta could disconnect the resistance”, 7 de julio de 2022.

## VII. Apoyar y defender a las mujeres

63. A pesar de los graves problemas de seguridad y financiación por los que están pasando, las organizaciones de la sociedad civil encabezadas por mujeres han ayudado a comunidades vulnerables con enorme coraje e ingenio. Hay grupos de mujeres que proporcionaron a comunidades afectadas por el conflicto alimentos, agua, medicamentos y kits de higiene, documentaron casos de violencia de género, prestaron servicios virtuales o presenciales de asesoramiento, respaldaron los realojamientos y la acogida en refugios de los supervivientes, apoyaron a familias de presos políticos y activistas del Movimiento de Desobediencia Civil, impulsaron campañas en pro de la democracia e impartieron a las comunidades formación sobre los derechos de la mujer, entre otras actividades<sup>27</sup>. Una defensora de los derechos humanos explicó lo siguiente:

Los grupos de mujeres saben cómo llegar a las comunidades necesitadas. Estamos dispuestas a asumir cualquier riesgo. [...] Nos preocupamos por los niños, los bebés, las embarazadas que quedarán en medio del conflicto.... Consigamos o no financiación de los donantes, continuaremos [prestando servicios].

64. Algunos tipos de violencia de género han existido en Myanmar desde hace decenios, pero el golpe de Estado ha dado pábulo a esta violencia entre los militares del país, que encontró terreno fértil en su cultura generalizada de la impunidad. Según investigaciones realizadas por defensoras de los derechos humanos que se hicieron llegar al Relator Especial, los actos de violencia sexual cometidos por soldados han aumentado y se han extendido geográficamente desde el golpe de Estado. El uso generalizado y sistemático de la violencia sexual indica que se trata de un fenómeno estructural que sirve para desmoralizar, intimidar y silenciar a las mujeres y las niñas.

65. Los grupos de defensa de los derechos de la mujer han documentado más de 100 casos de violación o violencia sexual en Myanmar desde el golpe de Estado, en su mayoría cometidos por militares y agentes de guardia fronteriza u otros grupos afines a la junta. Varias defensoras de los derechos humanos informaron al Relator Especial de que se tenía constancia de violaciones colectivas cometidas por soldados y de asesinatos precedidos de violaciones o agresiones sexuales en las aldeas. En algunos casos, las violaciones pudieron ser un medio para castigar a mujeres que participaban en actividades pacíficas de oposición a la junta. Los testimonios de desertores que se han hecho públicos recientemente confirman los relatos de las víctimas y hacen pensar que los mandos militares toleran la violencia sexual en las zonas de conflicto<sup>28</sup>.

66. En Rangún, hay casos de soldados y agentes de policía que secuestraron y violaron a mujeres que caminaban solas o en pequeños grupos, o agredieron a mujeres durante registros de domicilios particulares, amenazándolas con matarlas si contaban lo sucedido. Varias mujeres y personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero y *queer* (LGBTQ) han denunciado actos de violencia sexual durante los interrogatorios. Hay casos de militares que presuntamente exigieron favores sexuales a cambio de eliminar los nombres de las afectadas de las listas de detenciones ordenadas.

67. Los casos de violencia contra las mujeres que se denuncian e investigan solo suelen ser una fracción del total y documentarlos se ha vuelto más difícil desde el golpe de Estado. Las sobrevivientes suelen ser reacias a denunciar por varias razones, como los relatos que fomentan la vergüenza y el estigma social y el temor a las represalias de los perpetradores. Las organizaciones de derechos de las mujeres han

<sup>27</sup> Liga de Mujeres de Birmania, “April – May situation update of Burma/Myanmar”, pág. 1.

<sup>28</sup> Charlotte Attwood, Ko Aung y Rebecca Heschke, “I can’t forget her – Myanmar’s soldiers admit atrocities”, *BBC*, 22 de julio de 2022.

documentado casos de soldados que amenazaron a supervivientes de la violencia sexual con hacer daño a sus familiares, destruir sus aldeas o hacer alguna otra cosa si denunciaban delitos cometidos por militares. A causa de la degradación total del sistema de justicia desde el golpe y de la impunidad de la que gozan los militares desde hace mucho tiempo, es imposible obtener justicia en los tribunales.

68. La multiplicación de los desplazamientos forzados ha aumentado la vulnerabilidad de las mujeres y las niñas, que no tienen acceso al agua, la nutrición y los servicios vitales, incluidos los de salud sexual y reproductiva. Muchas mujeres se han visto obligadas a utilizar bolsas de plástico en lugar de compresas; los embarazos no deseados están aumentando por la imposibilidad de obtener anticonceptivos; y hay mujeres que dan a luz en la selva sin atención médica. Varios grupos de mujeres han denunciado que los casos de violencia doméstica en los campamentos de desplazados internos y las aldeas han ido aumentando a medida que se agravaban las dificultades económicas y la inseguridad alimentaria en los hogares.

69. El desplome de la economía de Myanmar ha afectado de forma desproporcionada a las mujeres y las niñas y las ha hecho más vulnerables a la explotación y los abusos. Con el aumento del número de familias que caen en la pobreza, las mujeres están asumiendo cada vez más tareas domésticas y haciendo sacrificios para cuidar de sus familias con menos recursos. La pérdida de ingresos y medios de subsistencia hace que las mujeres adopten estrategias de afrontamiento negativas. Han aumentado los casos de mujeres y niñas que contraen matrimonios precoces, que tienen hijos en edad temprana, que aceptan trabajos en karaokes y otros entornos en los que se exponen al acoso y los abusos sexuales, que optan por el trabajo sexual o que se marchan lejos de sus hogares o van al extranjero en busca de empleo. Según información facilitada por grupos de la sociedad civil, se han incrementado los casos de trata de mujeres y niñas hacia China, los Emiratos Árabes Unidos, la India, Malasia y Tailandia.

## **VIII. Defender los derechos de las personas con discapacidad**

70. En Myanmar, las personas con discapacidad han sufrido históricamente discriminación, estigmatización social y enormes problemas de acceso a los espacios y servicios públicos. Las organizaciones de la sociedad civil del país han realizado actividades de concienciación ciudadana y han aportado recursos y servicios directamente a las personas con discapacidad. A causa de la contaminación por minas terrestres y municiones sin detonar que afecta a todo el país, las organizaciones de la sociedad civil tuvieron que prestar servicios esenciales a personas que habían sufrido mutilaciones u otras lesiones en las zonas de conflicto. Las organizaciones que defienden los derechos de las personas con discapacidad también han contribuido de manera sustancial a promover políticas públicas de protección de los derechos de esas personas. Muchos dirigentes y empleados de esas organizaciones son ellos mismos personas con discapacidad.

71. Las redes de la sociedad civil que apoyan a las personas con discapacidad quedaron desarticuladas y trastocadas por el golpe de Estado y la campaña de violencia de los militares. Varios defensores de los derechos de las personas con discapacidad dijeron al Relator Especial que antes colaboraban directamente con funcionarios del Gobierno de la LND para promover el despliegue y la aplicación de la Ley de Derechos de las Personas con Discapacidad de 2015 y habían observado avances considerables, aunque lentos. Con el golpe de Estado no solo dejó de avanzarse, sino que el hecho de haber colaborado con la LND se convirtió en un factor de riesgo para los defensores de los derechos de las personas con discapacidad, que podían ser detenidos o agredidos por ello.

72. Las personas con discapacidad y los dirigentes de entidades que defienden sus derechos son un recurso infrautilizado que podría enriquecer considerablemente la concepción y ejecución de campañas de defensa de los derechos humanos e iniciativas de respuesta humanitaria. En lugar de utilizarlos como agentes de transformación de sus comunidades, lo más habitual es que se les consulte a posteriori. Las organizaciones internacionales y los grupos locales que defienden los derechos de las personas con discapacidad coinciden en que hay que poner mucho más empeño en aprovechar los conocimientos y las ideas de estas personas.

73. Las personas con discapacidad se han visto desproporcionadamente afectadas por el golpe de Estado y las violaciones de los derechos humanos cometidas por los militares. En las zonas de conflicto, es habitual que estas personas y los ancianos no puedan huir de los ataques violentos de los militares por tener una movilidad limitada o por no haber sido avisadas de la llegada de militares. Aunque no se dispone de datos cuantitativos, los medios de comunicación y las organizaciones de la sociedad civil han informado de numerosos casos de personas con discapacidad asesinadas en sus casas o pueblos cuando otros habitantes ya habían huido del ataque militar. La campaña de desplazamiento forzado de la población civil emprendida por los militares también ha separado a personas discapacitadas de sus familiares y otras redes de apoyo, lo que ha agudizado su aislamiento y vulnerabilidad.

74. Según información fidedigna facilitada al Relator Especial, los militares han ordenado a los hospitales y a los médicos de algunas zonas que, en lugar de atender a las víctimas de las minas terrestres, las deriven a hospitales militares. Esta medida tiene por objeto impedir que los combatientes de la oposición reciban tratamiento y ha hecho que a las víctimas de las minas terrestres no se les administren oportunamente tratamientos de buena calidad.

75. El desplome del sistema público de atención sanitaria ha privado de cuidados ordinarios a las personas con discapacidad. Los niños con discapacidad no suelen poder escolarizarse en centros de sistemas de educación sustitutiva, que a menudo carecen de los ajustes necesarios. Las personas con discapacidad suelen ser las primeras que pierden sus empleos cuando la economía del país se derrumba y los empleadores se adaptan a la situación. Los cortes de Internet y el aumento del precio de los servicios de telefonía móvil han afectado especialmente a las personas con discapacidad, que dependen en gran medida del teléfono e Internet para comunicarse, informarse y obtener servicios de telemedicina. Con frecuencia, las personas con deficiencias auditivas u otros problemas de comunicación no pueden intervenir de manera efectiva en sus propios juicios.

## **IX. Defender los derechos de los rohinyás**

76. La grave discriminación y el aislamiento de que son objeto los rohinyás suponen un reto adicional para los activistas, los defensores de los derechos humanos y los líderes comunitarios. Los rohinyás tienen que afrontar sin apenas ayuda externa multitud de problemas que amenazan seriamente su vida y su bienestar. En muchos casos, los dirigentes de la comunidad tienen que prestar servicios que los habitantes de otras partes de Myanmar reciben del Estado, las redes nacionales o las organizaciones internacionales. A modo de ejemplo, el Relator Especial habló con varios rohinyás que participan en iniciativas educativas o sanitarias que tratan de subsanar las barreras de acceso a las escuelas y hospitales públicos de esta comunidad. Como los medios de comunicación internacionales y los observadores de los derechos humanos no tienen acceso al estado de Rakáin, los defensores de los derechos humanos de los rohinyás hacen una labor esencial de difusión de información sobre

los problemas y los abusos que sufre la población. Su participación será esencial para conseguir que se rindan cuentas por los ataques genocidas contra los rohinyás.

77. En los últimos meses los rohinyás han tenido dos tristes aniversarios. El primero, en junio de 2022, marcó el décimo aniversario del inicio de la campaña de violencia y limpieza étnica patrocinada por el Estado contra los rohinyás y otras poblaciones musulmanas del estado de Rakáin, que condujo al internamiento de unos 130.000 rohinyás en campamentos para desplazados internos muy precarios, donde han permanecido los últimos diez años. En esos campamentos, que son de facto centros de reclusión cercados con alambradas de púas, los rohinyás sufren graves privaciones y apenas tienen acceso a servicios educativos y médicos y a medios de subsistencia<sup>29</sup>. En 2022 se restringió aún más la renovación y la construcción de campamentos, lo que deja a estas poblaciones todavía más desprotegidas.

78. El segundo, el 24 de agosto de 2022, corresponde al quinto aniversario del comienzo de la ofensiva genocida del ejército contra los civiles rohinyás en el norte del estado de Rakáin, que se saldó con miles de muertes y la huida a Bangladesh de 700.000 rohinyás en busca de refugio. Los rohinyás que quedan en el estado de Rakáin siguen sufriendo graves violaciones de los derechos humanos, a las que están particularmente expuestos por no tener ciudadanía. Las mujeres y las niñas rohinyás están especialmente aisladas y sufren tanto la represión oficial como las creencias y prácticas discriminatorias de sus propias comunidades. Ese aislamiento hace que corran mayor riesgo de abusos, explotación y trata de personas.

79. Dada la represión oficial en Myanmar y las pésimas condiciones en los campamentos de Bangladesh, muchos rohinyás siguen arriesgando sus vidas en viajes desesperados por tierra o mar hacia Malasia u otros destinos. Según los informes, muchos rohinyás han muerto en el mar y han sido objeto de abusos y extorsiones de tratantes de personas. Durante la misión oficial que realizó en Malasia en junio, el Relator Especial habló con varios rohinyás y otros refugiados. Celebró que Malasia hubiera abierto sus puertas a estas personas que huían de los abusos en Myanmar, pero se mostró preocupado por la falta de protección que la legislación del país daba a los refugiados, por los largos períodos de internamiento arbitrario que debían pasar en centros de detención de inmigrantes y por la falta de oportunidades de educación y subsistencia que se les ofrecía.

## **X. Información sobre la devastación del medio ambiente, el acaparamiento de tierras y las violaciones de derechos humanos por parte de las industrias extractivas**

80. Los militantes ecologistas, los defensores de los derechos humanos y las organizaciones comunitarias están en primera línea de combate contra una nueva y peligrosa oleada de explotación de recursos que se ha acelerado desde el golpe de Estado. Estos agentes están documentando los fenómenos de degradación ambiental, confiscación de tierras y violación de los derechos humanos asociados a las industrias extractivas y al recrudecimiento del conflicto y la situación de anarquía tras el golpe. Se ha vuelto extremadamente peligroso para las comunidades y los activistas estudiar los efectos nocivos de la actividad empresarial en las zonas de extracción, que suelen estar fuertemente vigiladas. Hay casos de miembros de comunidades locales y militantes ecologistas detenidos, amenazados y atacados por resistirse a la expropiación de tierras. A pesar de los riesgos, en todo el país hay grupos de defensa

<sup>29</sup> Burmese Rohingya Organisation UK, “New briefing: ‘Slow death’ – ten years confined to camps for 130,000 Rohingya in Myanmar,” 23 de mayo de 2022. Publicado en <https://www.brouk.org.uk/wp-content/uploads/2022/05/ICJ-Briefing-May-2022.pdf>.

de los derechos indígenas y de protección del medio ambiente que siguen abogando por la protección de sus derechos consuetudinarios sobre los territorios en los que viven y sus recursos naturales.

81. Desde el golpe de Estado, diversos agentes (pertenecientes a élites empresariales vinculadas a la junta, fuerzas de la guardia fronteriza, milicias locales, el Ejército para la Independencia de Kachín y otros grupos) han aprovechado el vacío de gobernanza para acrecentar su influencia y control sobre las lucrativas concesiones de recursos naturales. Al parecer, la extracción de oro, jade y tierras raras ha aumentado considerablemente, con frecuencia al calor de las inversiones y las actividades comerciales ilícitas de empresas extranjeras<sup>30</sup>. Numerosas fuentes han confirmado que la minería de tierras raras está en manos de empresas chinas que llegaron a acuerdos con las fuerzas de la guardia fronteriza o las milicias. El Relator Especial ha sido informado de numerosos casos de lugareños que se han visto obligados a vender sus tierras o forzados a desplazarse por grupos afines a la junta a fin de despejar el camino a las nuevas empresas mineras.

82. Muchas apropiaciones de tierras y actividades extractivas se desarrollan en zonas pobladas por minorías étnicas y están destruyendo tierras, ríos y bosques esenciales para las culturas y las formas de vida de los pueblos indígenas. Según los grupos de la sociedad civil, la minería no regulada ha devastado el medio ambiente, causado deforestación y pérdida de biodiversidad y afectado negativamente a la seguridad alimentaria. El uso de sustancias químicas tóxicas en las operaciones mineras ha secado las tierras y contaminado las aguas subterráneas. La contaminación por mercurio y el aumento de la sedimentación han hecho que las aguas de varios ríos y arroyos ya no sean aptas para el consumo, el baño, la pesca y la agricultura. Hay zonas en las que han desaparecido aves, insectos, peces y otras formas de vida silvestre. Algunos grupos de la sociedad civil han denunciado que esos efectos negativos en el medio ambiente hacen que los pueblos indígenas tengan que abandonar sus tierras ancestrales. Como señaló un agente de la sociedad civil: “Se verán obligados a marcharse porque el entorno en el que viven será destruido hasta que no quede nada. ¿Adónde irán después?”.

## **XI. Solicitudes de refuerzo de la respuesta anticrisis de la comunidad internacional planteadas por la sociedad civil de Myanmar**

83. La sociedad civil de Myanmar ha seguido promoviendo iniciativas para convencer a los Estados Miembros de que deslegitimen a la junta y bloqueen todas sus vías de suministro de armas y fuentes de ingresos. Muchos Estados Miembros han tomado medidas efectivas a tal efecto, pero el problema sigue tratándose con medidas parciales y desarticuladas. Hay demasiados Gobiernos que todavía no se han puesto manos a la obra pese a sus discursos de apoyo a la democracia en Myanmar<sup>31</sup>. A modo de ejemplo, algunos Estados Miembros han impuesto sanciones a algunas personas y entidades vinculadas a los militares pero se resisten a seguir el ejemplo de la Unión Europea, que ha sancionado a Myanmar Oil and Gas Enterprise, una de las principales

<sup>30</sup> Global Witness, “Heavy rare earth supply chain risks: illicit minerals from Myanmar are the world’s largest source of supply”, agosto de 2022.

<sup>31</sup> Véase, por ejemplo: “Open letter to Australian Foreign Minister Penny Wong from 688 civil society organisations”, 29 de junio de 2022. Publicado en <https://progressivevoicemyanmar.org/2022/06/29/open-letter-to-australian-foreign-minister-penny-wong-from-688-civil-society-organisations/>.

fuentes de ingresos de la junta<sup>32</sup>. Alemania, el Canadá, Maldivas, los Países Bajos y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte han anunciado su intención de sumarse a la causa por genocidio incoada por Gambia contra Myanmar ante la Corte Internacional de Justicia, pero otros Estados Miembros no han seguido el ejemplo.

84. Los donantes y redes de apoyo internacionales no siempre han estado a la altura de las organizaciones de la sociedad civil, que han sabido adaptarse a los nuevos retos con flexibilidad, creatividad y resiliencia. Los complejos procesos de solicitud y presentación de informes, los requisitos de presentación de informes financieros y la obligación de registrarse ante organismos controlados por la junta socavan la capacidad de estas organizaciones de financiarse de manera sostenida con fondos de fuentes internacionales. Algunos activistas y defensores de los derechos humanos dijeron al Relator Especial que determinadas exigencias de los donantes eran inasumibles en las actuales condiciones de funcionamiento y aumentaban sus niveles de riesgo. Por ejemplo, llevar recibos o documentos financieros (en papel o formato digital) sobre entregas de ayuda humanitaria podía ser motivo de detención durante las inspecciones practicadas en puestos de control militares.

85. La ASEAN ha excluido a los representantes de la junta de algunos de sus actos, pero no ha afrontado adecuadamente el desdén manifiesto de la junta por el consenso de cinco puntos, que la obliga a cooperar para poner fin a la violencia, mantener un diálogo constructivo y prestar ayuda humanitaria. Los defensores de los derechos humanos han criticado que la ASEAN y sus Estados miembros hayan seguido colaborando con los militares de Myanmar, a veces apoyándolos directamente<sup>33</sup>. La ejecución de los cuatro activistas de la oposición en julio parece haber sido un punto de inflexión para algunos Estados miembros de la ASEAN. En su calidad de Presidenta de la ASEAN, Camboya hizo pública una declaración en la que reprobaba esas ejecuciones afirmando que ponían de manifiesto una “patente falta de voluntad” de aplicar el consenso de cinco puntos.

86. Un agente de la sociedad civil describió su decepción por la respuesta internacional de la siguiente manera:

La comunidad internacional sigue fallando al pueblo de Myanmar. Se escuda en el consenso de cinco puntos de la ASEAN, que no ha impedido que la junta siga cometiendo crímenes atroces con total impunidad. Lo que ahora necesitamos es coordinar esfuerzos para aplicar sanciones selectivas y un embargo mundial de armas y reclamar que se haga justicia y que se rindan cuentas ante la Corte Penal Internacional o un tribunal específicamente creado para ese fin. De lo contrario, los militares seguirán matándonos mientras el mundo observa desde la distancia.

87. Las organizaciones de la sociedad civil agradecen sin ambages el apoyo decisivo de algunos Gobiernos, fundaciones y donantes internacionales, que les ha permitido adaptarse a las circunstancias surgidas tras el golpe de Estado y prestar una asistencia vital a la población de Myanmar. Algunos Gobiernos extranjeros han ofrecido asilo a líderes y activistas de la sociedad civil que corrían el riesgo de ser detenidos o agredidos en el país. Algunas organizaciones internacionales respondieron a los graves problemas de seguridad aportando ayuda financiera de emergencia y ofreciendo formación y recursos sobre seguridad física y digital. Desde el golpe,

<sup>32</sup> Véase la declaración titulada “637 Myanmar and international civil society organizations and over 220, 000 people call on the US to sanction Myanmar’s oil and gas revenues and stop the bankrolling of the genocidal military junta”, 4 de mayo de 2022.

<sup>33</sup> Justice for Myanmar, “ASEAN’s complicity in the Myanmar military’s atrocity crimes exposed”, 10 de mayo de 2022; véase “Open letter to ASEAN defence ministers by 677 regional and international civil society organizations regarding Myanmar junta participation in ADMM”, 15 de junio de 2022. Publicado en <https://progressivevoicemyanmar.org/2022/06/15/open-letter-to-asean-defence-ministers/>.

algunos Gobiernos y donantes han anunciado nuevas iniciativas de apoyo financiero a las organizaciones de derechos humanos y al movimiento en pro de la democracia.

88. Pese a esos importantes esfuerzos, el apoyo que la comunidad internacional presta a la sociedad civil es muy inferior al que se requiere para atender las enormes necesidades de Myanmar. Muchos dirigentes de la sociedad civil dijeron al Relator Especial que sus organizaciones habían llenado el vacío dejado por las organizaciones internacionales que se habían ido de Myanmar o habían dejado de trabajar en las zonas afectadas por el conflicto, pero dependían en gran medida de las fuentes de financiación preexistentes o de las donaciones de la población local para sufragar la ampliación de su huella operacional. Una representante de una destacada organización de derechos de la mujer hizo hincapié en este punto, declarando lo siguiente:

Muchas dirigentes están refugiadas y tienen escasos ingresos, pero siguen ayudando a sus comunidades ante la falta de apoyo internacional. [...] Cuanto más ignora la comunidad internacional [el problema], más aumenta la carga [que soportan] las organizaciones de defensa de los derechos de la mujer y las mujeres que las dirigen. Llevamos todo ese peso sobre nuestros hombros. Sabemos que esta situación no es sostenible y que no durará mucho, pero creemos que es nuestra responsabilidad.

## **XII. Recomendaciones**

89. **El Relator Especial insta a la junta militar a que cese de inmediato los ataques a civiles y otras violaciones de los derechos humanos, a que deje de utilizar minas antipersonales, a que libere a todos los presos políticos, a que disuelva el Consejo de Administración del Estado, a que renuncie a sus funciones para que pueda formarse un gobierno legítimo que responda a la voluntad del pueblo, y a que coopere con los mecanismos internacionales de rendición de cuentas.**

90. **El Relator Especial pide al Consejo de Seguridad que apruebe una resolución en la que: a) imponga a Myanmar un embargo general sobre las armas y el suministro de combustible aeronáutico a los militares; b) imponga sanciones económicas específicas contra el ejército de Myanmar, sus mandos y sus fuentes de ingresos; y c) eleve la situación de Myanmar a la Corte Penal Internacional. La posibilidad de que uno o más miembros del Consejo de Seguridad ejerzan el veto no es óbice para que otros sometan un proyecto de resolución a la consideración, deliberación y votación del Consejo.**

91. **El Relator Especial pide a todos los Estados Miembros que apoyan al pueblo de Myanmar y defienden sus derechos que atiendan al llamamiento de los defensores de los derechos humanos de Myanmar a adoptar una estrategia diferente para afrontar la crisis. Los Estados Miembros deben aunar esfuerzos para ejercer una presión firme y sostenida sobre la junta, entre otras cosas coordinando la aplicación de sanciones selectivas y apoyando iniciativas y mecanismos que posibiliten la rendición de cuentas por las graves violaciones de los derechos humanos. El Relator Especial recomienda a los Estados Miembros que:**

**a) Convoquen una reunión urgente de todos los Estados Miembros que defienden los derechos humanos en Myanmar para poner en marcha de manera coordinada una iniciativa estratégica precisa que permita privar a la junta de las armas, los fondos y la legitimidad de los que se vale para proseguir su campaña**

de violencia y represión de las aspiraciones democráticas del pueblo de Myanmar;

b) Interrumpan de inmediato la venta o transferencia de armas y tecnología de doble uso a Myanmar y dejen de suministrar combustible aeronáutico a los militares;

c) Impongan sanciones económicas a las personas y entidades que faciliten armas y municiones a los militares;

d) Reduzcan la capacidad de los militares de financiar sus atrocidades sancionando al Banco de Comercio Exterior de Myanmar, a Myanmar Oil and Gas Enterprise y a otras fuentes cruciales de ingresos;

e) Trabajen en coordinación con los servicios nacionales de información financiera, las fuerzas del orden y los ministerios de Justicia y Hacienda para localizar e incautar activos pertenecientes al Estado de Myanmar;

f) Deslegitimen a la junta negándole todo reconocimiento ante los organismos internacionales, incluidas las Naciones Unidas, y excluyendo a los oficiales de la junta de los foros y funciones internacionales;

g) Contribuyan a que los responsables de delitos atroces, como los delitos contra la infancia, respondan por ellos ante tribunales imparciales e independientes, como la Corte Penal Internacional, la Corte Internacional de Justicia y los tribunales nacionales de los países cuya legislación reconoce el principio de jurisdicción universal;

h) Acojan refugiados de Myanmar y les faciliten el apoyo previsto en las normas internacionales;

i) Amplíen los programas de reasentamiento de refugiados de Myanmar, incluidos los refugiados rohinyá, y ayuden a activistas, periodistas y defensores de los derechos humanos a salir de Myanmar para buscar asilo en terceros países.

92. El Relator Especial recomienda a la ASEAN y a sus Estados miembros que:

a) Tomen nota de las violaciones flagrantes del consenso de cinco puntos cometidas por la junta militar y velen por que cualquier disposición de liberación de presos políticos, cese de la violencia y restablecimiento de la democracia que se acuerde en el futuro esté sujeta a plazos concretos y objetivos cuantificables;

b) Consideren la posibilidad de suspender toda relación de la junta militar con la ASEAN, en reconocimiento de que su pretensión de gobernar Myanmar es ilegítima;

c) Prohíban que los oficiales de la junta y los organismos que estén bajo su control representen a Myanmar en cumbres o actos de la ASEAN;

d) Interactúen con el Gobierno de Unidad Nacional y el Consejo Consultivo de Unidad Nacional, que son importantes entidades de representación de la voluntad y los intereses del pueblo de Myanmar;

e) Faciliten el suministro de ayuda humanitaria a todas las poblaciones necesitadas, entre otras cosas apoyando la distribución transfronteriza de ayuda humanitaria por conducto de organizaciones locales de la sociedad civil.

93. El Relator Especial recomienda a las entidades de las Naciones Unidas y a las organizaciones humanitarias internacionales que:

a) Presten más asistencia humanitaria al pueblo de Myanmar, entre otros medios financiando íntegramente su Plan de Respuesta Humanitaria para 2022;

b) **Colaboren directamente con organizaciones locales y comunitarias en la distribución de ayuda humanitaria, sobre todo en las zonas a las que no pueden acceder las organizaciones humanitarias internacionales;**

c) **Apoyen en la medida de lo posible la prestación de asistencia transfronteriza a los desplazados internos.**

94. **El Relator Especial recomienda a los donantes internacionales, incluidas las fundaciones, los Estados Miembros y las organizaciones intergubernamentales que:**

a) **Presten más apoyo a las organizaciones de la sociedad civil de Myanmar;**

b) **Financien de manera consistente iniciativas de investigación y promoción en apoyo de los derechos humanos y de los intereses de los defensores de los derechos humanos, los periodistas, los abogados, los defensores de los derechos de la mujer, las personas LGBTQ, las personas con discapacidad, las poblaciones indígenas y minorías étnicas y otros grupos en situación de riesgo en Myanmar;**

c) **Apliquen soluciones creativas para superar los problemas de funcionamiento de las organizaciones en Myanmar, por ejemplo flexibilizando los requisitos de presentación de informes, adoptando métodos alternativos de transferencia de fondos, eximiendo de toda obligación de registro ante organismos controlados por la junta, adaptando los procedimientos operativos a fin de posibilitar intervenciones humanitarias urgentes y oportunas, y primando la financiación básica sobre las subvenciones para tareas específicas siempre que sea posible.**

---